

24 Expansión Miércoles 20 junio 2018
ECONOMÍA/POLÍTICA

La subida de las pensiones en tiempo de crisis bloquea el Pacto de Toledo

EL PP PIDE TIEMPO PARA NEGOCIAR POR EL CAMBIO DE SU DIRECCIÓN/ La izquierda y la derecha discrepan totalmente sobre la forma de subir las pensiones en los momentos de crisis económica.

M.Valverde, Madrid

La negociación de los partidos políticos sobre la futura reforma de las pensiones encajó ayer. La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo quedó dividida entre la derecha y la izquierda porque no hay acuerdo sobre la forma de subir las pensiones cuando hay una crisis económica.

El PSOE -que es el partido del Gobierno- Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Compromís defienden que, en el futuro, las pensiones suban en todo momento igual que el Índice de Precios de Consumo (IPC). Tanto si hay crecimiento económico, como si hay crisis y recesión.

De llevarse a cabo esta reforma, quedarían completamente derogadas las que hizo el Gobierno del PP en 2013: la desvinculación de las pensiones respecto a la evolución de la inflación, a través del IRP, y el llamado Factor de Sostenibilidad. Es decir, el cálculo de la primera pensión con la esperanza de vida de la generación del jubilado. Dicho de otra forma, arbitrar un mismo presupuesto para la jubilación de varias cohortes en dos o tres años.

Ambas reformas han quedado suspendidas hasta 2020 y 2023, respectivamente, en virtud del pacto que suscribieron el pasado 25 de abril el Gobierno del PP y el PNV. Precisamente, José Luis Escrivá, presidente de la Autori-

Autoridad Fiscal: la subida de las pensiones hasta 2019 costará 2.700 millones de euros

dad Fiscal (AIREF), dijo ayer que la subida de las pensiones en 2018 y 2019, por el acuerdo entre el Gobierno del PP y el PNV, costará 2.700 millones de euros, informa Rubén Sampedro desde Santander. Es decir, 600 millones menos de lo que estimó el anterior Gobierno. El acuerdo recogía, en líneas generales, una subida del 1,6% en las pensiones para este año, e igual que el IPC, en 2019. No obstante, las rentas más bajas aumentarán un 3%.

Sin embargo, el PSOE y su aliados quieren derogar las reformas de 2013 definitivamente. "Queremos garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en todo momento", dijo Mercè Perea, al término de la reunión de la comisión parlamentaria.

Por el contrario, PP, Ciudadanos, PNV y PDeCat defienden que la subida de las pensiones debe "modularse" en los momentos de crisis económica, para no aumentar el déficit de la Seguridad Social. En este punto está el desacuerdo con la izquierda.

Todos estos partidos abogan por dos alternativas en esas circunstancias: la primera es la congelación de las



La presidenta del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, con los diputados del PP, José María Barrios, a la derecha; Gerardo Camps (de frente), Rafael Merino, (izda), y Carles Campuzano (PDeCAT), de espaldas.

pensionas más altas para que las más bajas puedan subir como el IPC. Es una propuesta del PDeCat, apoyada por los demás grupos de la derecha.

La segunda alternativa, introducida por el PP para atenuar la subida de las pensiones en tiempos de crisis, propone lo siguiente: que, además del IPC, el Gobierno de turno pueda tener en cuenta otros factores, como la evolución del PIB, de los salarios y de las cotizaciones sociales. Es decir, elementos que deberían servir para vincular la subida de las pensiones con la situación de economía. Una fórmula parecida al Índice de Revalorización de las

Pensionas (IRP), que ha quedado suspendido hasta 2020.

El portavoz del PP, Gerardo Camps, advirtió al Gobierno y al PSOE que "no habrá acuerdo [en el Pacto de Toledo] si se trata de subir las pensiones en todo momento con el IPC puro y duro". Es más, la portavoz de Podemos, Aina Vidal, expresó su temor de que se rompan las negociaciones sobre la forma de subir las pensiones y cada grupo haga un voto particular. De momento, las negociaciones, con luz y taquígrafos, quedaron ayer aplazadas hasta septiembre, por dos razones. La primera es que el PP pidió a la Comisión del Pacto de Toledo que espere hasta

que se celebre su congreso extraordinario el 20 y 21 de julio. Camps explicó que la elección de un nuevo presidente para sustituir a Mariano Rajoy a frente del partido puede cambiar los portavoces en el Congreso, y hasta la estrategia en las negociaciones. En segundo lugar, hasta las vacaciones, la Comisión del Pacto de Toledo, recibirá a una nueva ronda de expertos para conocer sobre la diferencia de pensiones que hay entre hombres y mujeres. Además, comparecerá por primera vez la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y el secretario de Estado Octavio Granado.

Las empresas piden que se mantenga la reforma laboral

MX, Madrid

El presidente de la empresa familiar madrileña, Alberto Zoilo, pidió ayer al Gobierno que no revierta la reforma laboral de 2012, que promovió el anterior Ejecutivo del PP. Zoilo recordó la recesión, que transcurrió entre 2007 y 2013 y destruyó más de tres millones de empleos y medio millón de empresas. En esas circunstancias, Zoilo destacó que fue la reforma laboral "la que permitió a las empresas adaptarse mejor al ciclo económico, aportando mayores cotas de flexibilidad". "De haber contado con esta herramienta antes de la crisis -añadió Zoilo-, es muy probable que se hubiera evitado el cierre de muchas empresas y la destrucción de muchos miles de empleos".

El Gobierno ha anunciado que intentará cambiar algunos aspectos de la reforma laboral, como los siguientes: restaurar la supremacía del convenio sectorial sobre el de empresa; recuperar la prórroga indefinida de los convenios; reducir la subcontratación entre las empresas, y combatir el fraude en el empleo temporal y entre los falsos autónomos.

Zoilo también expresó su preocupación por los últimos anuncios del Gobierno sobre sus intenciones de aumentar el gasto social. Por ejemplo, en las pensiones y en la sanidad. Además, Zoilo teme que la futura reforma de la financiación autonómica obligue a la Comunidad de Madrid a subir los impuestos en Sucesiones y Donaciones, "figuras tan sensibles para los ciudadanos y las empresas familiares". El presidente regional, Ángel Garrido, que estaba presente en el acto, siempre ha dicho que nunca subirá los impuestos. "La subida del gasto y a una mayor presión impositiva no son la mejor solución para una economía muy dependiente de la financiación exterior", dijo Zoilo.

S&P sitúa Cataluña como la comunidad más débil

I.Benedito, Madrid

Elevada deuda, falta de liquidez, debilidad presupuestaria, gestión financiera muy débil... Así define S&P algunos de los parámetros que definen el comportamiento financiero de Cataluña, apenas dos semanas después de que el Gobierno decidiera levantar el control financiero de la Generalitat.

La comunidad no sólo cuenta con el peor rating de las 11 regiones que analiza la agencia crediticia (B+). S&P también considera que Cataluña es la única comunidad con una gestión financiera "muy débil", y la que mayor

deuda concentra. La delgada línea sobre la que transitan las finanzas catalanas contrasta con la senda de recuperación del resto de comunidades. En un informe comparativo publicado ayer, S&P señala que es el primer año en que la deuda de las comunidades podría empezar a disminuir: "2018 podría marcar un punto de inflexión, después de 10 años de incremento de la deuda regional desde la crisis financiera".

De las once regiones españolas que analiza S&P, siete han mejorado su rating y la mitad podría experimentar nuevas subidas al encontrarse en perspectiva positiva.

La situación financiera de Cataluña es bien distinta. El rating de la Generalitat es el único susceptible de caer más bajo, estando ya por debajo del *bono basura*. "Solo Cataluña mantiene una perspectiva negativa", señala S&P, que ya en abril alertó a los inversores del riesgo de la capacidad de pago de la comunidad catalana, a la que mantiene en alerta de crédito. La agencia considera la inestabilidad política en Cataluña como un factor que "pone en riesgo el pago de la deuda y la financiación de la misma".

En el primer trimestre del año, la deuda de Cataluña as-

ció a 77.478 millones de euros. La mayor parte de esta deuda la tiene con el Estado (más de 54.382 millones de euros), a través de mecanismos de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Para 2018 y 2019, la Generalitat podría necesitar unos 17.800 millones de euros del FLA, que continuarían inflando la deuda de la comunidad. El debate entra con el cambio de Gobierno, ya que la petición, por parte del PSC de Miquel Iceta, de una donación de la deuda catalana, vuelve a estar sobre la mesa.

2018 podría ser el año en que la deuda de las comunidades empiece a reducirse

†
ALBERTO FRESNEDA CARRASCO
(D.E.P.)
Hijo de nuestro compañero Carlos Fresneda
(Corresponsal en Londres de 'El Mundo')
Falleció el lunes 18 de junio en Londres a los 19 años de edad.
Sus compañeros de Unidad Editorial se suman al dolor de la familia.